



Lo que sigue para quienes pensamos que los gobiernos funcionan mejor cuando están sometidos al escrutinio público es tomarle la palabra al gobierno.



**LUIS CARLOS
UGALDE**

luiscarlosugalde@integralia.com.mx

INAI sin funeral

Fuera del círculo de especialistas, de organizaciones civiles y partidos políticos, casi nadie extrañará al Instituto Nacional de Acceso a la Información, el INAI. Aunque los críticos de la eliminación del Instituto dijeron que “regresamos a una época oscura”, el común de la gente ha sido indiferente.

Más de 20 años de existencia del INAI lograron poco para que la cultura de la transparencia permeara entre la gente. Es cierto que las solicitudes de información crecieron: pasaron de cerca de 23 mil en 2003 a más de 314 mil en 2022, pero no se gestó una cultura de transparencia en la población. Había más solicitudes, pero era una práctica de nicho.

Sin embargo, aunque no haya una demanda generalizada de transparencia –igual que no la hay por los derechos humanos o por otros derechos– la desaparición del INAI y de los órganos estatales de transparencia es una derrota política e incluso cultural para edificar gobiernos abiertos a la sociedad y dispuestos a rendir cuentas

de lo que hacen y de lo que gastan.

Desde 2002 –cuando se promulgó la primera ley de transparencia– organizaciones civiles, medios de comunicación, públicos especializados y personas en lo individual aprendieron que tenían un derecho frente al Estado para exigir información. Se gestó una incipiente actitud de relación horizontal entre la sociedad y sus gobiernos: el derecho a la información empoderó a la sociedad.

Esto resquebrajó poco a poco la actitud patrimonialista que permea a muchos funcionarios públicos e indujo a los gobiernos municipales, estatales y federal para contar con sistemas para archivar documentos, responder a peticiones de información y ser más ordenados en su administración. La transparencia ayudó a profesionalizar la gestión pública.

Sin embargo, hubo fallas y deficiencias. La primera es que mayor transparencia no significó menor corrupción en el periodo. De hecho, la existencia del INAI, antes IFAI, coincidió con una

explosión de mayor corrupción en México, sobre todo en gobiernos locales. La causa no fue el INAI, por supuesto, sino la falta de legalidad, un mayor pluralismo que se transformó en complicidad y el empoderamiento de los gobernadores, entre otras razones.

Cuando la transparencia ayudaba a detectar irregularidades o abusos, pocas veces se detonaban procesos judiciales para castigarlos. De tal forma que la gente no vio cuál era el mérito de la transparencia si los gobiernos seguían corruptos e impunes.

Otra deficiencia fue que el INAI y los institutos estatales no fueron efectivos para bajar la cultura de la transparencia a ras de tierra. Durante dos décadas comisionados y directivos de órganos de transparencia se hablaron al ombligo. Informes anuales que daban cuenta del crecimiento de las solicitudes de información que solo se leían en eventos oficiales. Cursos, seminarios y concursos para vanagloriarse. Pero en las calles del país la transparencia

era una abstracción de élites.

Por eso el INAI ha desaparecido y pocos lo han llorado. En la opinión pública el tema es inadvertido. En redes sociales, la crítica es minoritaria. Según Dinamic, una agencia de investigación digital, aunque 47% criticó la medida, 28% la aplaudió y 23% de la conversación mostró indiferencia.

¿Qué hacemos ahora? Que la desaparición del INAI no signifique la demolición –en los hechos– del derecho de acceso a la información.

Para quienes pensamos que los gobiernos funcionan mejor cuando están sometidos al escrutinio público, lo que sigue es tomarle la palabra al gobierno. Claudia Sheinbaum ha dicho que, una vez desaparecido el INAI, “habrá más transparencia y menos corrupción”. Las organizaciones especializadas, los medios de comunicación y los partidos deben tomarle la palabra y exhibir las deficiencias.

Una vía para ello es hacer de la transparencia un instrumento útil para la gente, como lo es la credencial del INE o una tarjeta para acceder a tu saldo bancario. Hay tres ámbitos con enorme potencial para el grueso de la población: transparentar los padrones de beneficiarios de programas sociales, transparentar la gestión de citas y administración de medicamentos en los centros de salud y transparentar el funcionamiento de los juzgados ahora que el pueblo será quien elija a sus jueces.